

Ochocientos mil empleos, pero menos

Cada vez está más claro que el objetivo del Gobierno socialista —la creación de 800.000 empleos— difícilmente podrá realizarse. Esa promesa electoral no se entendió bien o no se explicó suficientemente, ya que, a estas alturas, el lector medio de periódicos puede interpretar erróneamente que la oferta del PSOE consistía en reducir durante su mandato de cuatro años en más de un tercio la cifra de parados, ya que hay 2.200.000 en España y se iban a crear 800.000 empleos nuevos.

No es así. El Gobierno habla (cada vez menos, hay que anotarlo) de 800.000 empleos netos como los necesarios para que se logre mantener el mismo nivel de población ocupada, en proporción sobre la total, mientras el ritmo de paro siga creciendo —y lo hará, no hay duda, en los próximos cuatro años— complementado, además, por un crecimiento vegetativo de la población que añade parados jóvenes, nuevos y no registrados que buscan su primer empleo.

Habría sido arriesgado por parte del Partido Socialista prometer una reducción en términos absolutos del desempleo. El «ambicioso» objetivo del Gobierno (no se sabe si con preferencia sobre la lucha contra la inflación) es reducir en un punto anual el porcentaje de paro en España de modo que si ronda ahora el 17 por 100, quede situado en torno a un 13 por 100 en 1986, cuando, a menos que se produzca una grave crisis, tengan que rendir cuentas a los electores.

Pese a esta importante matización, el objetivo parece aún más difícil. Acaba de completarse, con los datos del cuarto trimestre, la Encuesta sobre Población Activa (EPA) correspondiente a 1982: el dato más significativo es que a lo largo del año se desaceleró la caída del empleo, aunque los técnicos subrayan que se mantiene mejor el empleo asalariado que el no asalariado (es decir, el de agricultores, trabajadores autónomos, empresas familiares, et.). Como dato inicial esa tendencia es buena para un Gobierno socialista.

En un principio la publicación de la EPA

correspondiente al cuarto trimestre de 1982 produjo cierta sorpresa, ya que los datos de paro avanzaban fuertemente. Hubo quien estudió la posibilidad de un trucaje que elevase artificialmente la cifra de desempleados para dar cierto margen de maniobra al Gobierno, ya que éste, con números inflados a principio de su mandato, podría presentar ya cierta mejora a finales de 1983. Las sospechas procedían de que el «cambio» en el Instituto Nacional de Estadística provocase ciertas presiones para modificar los criterios e incluso las propias cifras.

La independencia de INE

No ha sido así y conviene que el INE no sólo mantenga, sino que potencie su independencia de los poderes administrativos para seguir presentando estudios objetivos y fiables. Hay que recordar que en Francia el organismo homólogo al INE español —el INSEE— está mucho mejor dotado y tiene rango independiente del cambio político.

Volviendo a la EPA del cuarto trimestre, los servicios técnicos de CEOE se apresuraron a desmenuzarla, para concluir que no se había producido trucaje algunas y el modo de comprobarlo es fácil: si el paro hubiese crecido «demasiado», el dato correlativo sería sin duda una disminución de la población ocupada y, por tanto, un aumento de la productividad al dividirse el mismo producto por menos trabajadores. No ha sido así. La productividad se mantiene en los mismos niveles y el nivel de empleo total en España tuvo en ese cuarto trimestre de 1982 la caída más suave del año (disminuyó un 0,59 por 100 frente al descenso del 1,97, 1,12, 1,21 en el primero, segundo y tercer trimestre, respectivamente).

Los datos de empleo con los que arranca el Gobierno del PSOE son, en cierto modo, positivos. Pero a la vez, las condiciones para que ese nivel se mantenga —y ese es el objetivo central— son muy difíciles, aún aceptando las máximas cotas de crecimiento posibles. En los primeros cien días el Ministerio de Economía ya ha revisado a la baja los objetivos de crecimiento del Producto Interior Bruto: de un 2,5 por 100 hemos descendido ya a un modesto 2 por 100. Aunque esa tasa se mantuviese a lo largo de cuatro años, difícilmente podrían crearse más de 400.000 puestos de trabajo. Según los técnicos que han elaborado la EPA, mantener la misma población ocupada —o, en lectura política, crear 800.000 puestos de trabajo— exigiría un crecimiento del 2,5 por 100 anual en el nivel de empleo, una tasa que la economía española no ha logrado ni en sus mejores épocas de actividad. El Gobierno se ha puesto como objetivo algo más que una plusmarca.

José Luis CARRASCOSA